

La agricultura y la alimentación ante la opinión pública

Joaquín Olona Blasco

Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

Los fondos públicos destinados al apoyo de la agricultura, la alimentación y el desarrollo rural, en un su mayor parte procedentes de la UE, compiten con presupuestos destinados a otros objetivos económicos, sociales y territoriales. El reparto está condicionado por multitud de factores, entre ellos el deseo de satisfacer las demandas de los ciudadanos, que son quienes votan y aportan el dinero.

Pero saber qué es lo que quieren exactamente los ciudadanos no es fácil. Además, ni todos los ciudadanos ni todos los grupos sociales quieren lo mismo. Tienen distintas necesidades y diferentes prioridades que evolucionan con el tiempo y que se ven afectadas por la coyuntura económica.

En una sociedad cada vez más urbana y ajena a la realidad agraria es natural que sean cada vez más quienes cuestionan que el campo sea objeto de atención de las políticas públicas y que se ayude, con el dinero de todos, a los agricultores. Si no se explica, de forma clara y comprensible el

cuestionamiento será cada vez mayor y, con ello, mayor la dificultad para desarrollar y aplicar las políticas que se necesitan.

El pasado 29 de junio la Comisión Europea presentó su propuesta para las políticas comunitarias en el marco de la Estrategia Europa 2020. Todas las políticas comunitarias, salvo la agrícola, aumentan su dotación financiera con respecto al vigente periodo 2007-2013. Según esta propuesta la Política Agrícola Común (PAC) dispondría de 371.700 millones de euros para el nuevo periodo 2014-2020. De este modo, la PAC perdería el liderazgo presupuestario, que pasaría a ostentarlo la Política de Cohesión, la que persigue reducir las diferencias entre las regiones y a la que se asignan 376.000 millones de euros.

Difícilmente puede esperarse una opinión pública favorable a una política que, como la agrícola, no se explica a todos los ciudadanos. Pero que, además, en vez de justificarse en base a razones claras, fiables y comprensibles se recurre a argumentos demasiado

sofisticados, cuando no cuestionables. Argumentos y razones que poco tienen que ver con lo que para todos resulta fácil de entender: mejora de la productividad, equiparación de rentas, estabilización de mercados y seguridad alimentaria.

La opinión pública es plenamente consciente de la importancia de la alimentación. Pero quizás no lo sea tanto respecto de la importancia de las políticas agrarias y su estrecha vinculación con una alimentación verdaderamente segura. Renunciar a dichas políticas, es decir, dejar la agricultura a merced exclusiva del merca-

do y de la libre competencia implica hacerlo con la alimentación.

Las consecuencias de la desregulación financiera ya las conocemos. También conocemos la tragedia del hambre, siempre presente y normalmente asociada a otras graves carencias políticas y sociales. Es más difícil imaginar las consecuencias que para nosotros mismos tendría la ausencia de política agraria. Fue la aplicación reiterada de una pésima política agraria lo que, a mediados del siglo XIX, desencadenó la 'hambrea de la patata' llevando a Irlanda a una debacle social y económica de la que todavía no se ha recuperado. Y conviene recordar que fue la elevación del precio del pan, como consecuencia de la falta de trigo, lo que desencadenó la caída del régimen de Mubarak en Egipto tan sólo hace unos meses. Y es la ausencia de políticas agrarias propias, algo generalizado en el mundo subdesarrollado, una de las razones esenciales a las que atribuir que el hambre azote nuevamente el Este de África.

Difícilmente puede esperarse una opinión pública favorable a una política que no se explica a los ciudadanos